

EL MOVIMIENTO DE LOS DESTECHADOS COLOMBIANOS EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70

GILMA MOSQUERA TORRES

1. Introducción

Los movimientos urbanos organizados en torno al derecho al espacio residencial y a la vivienda surgen en el país a finales de la década de los años 40, constituyendo hoy un frente de lucha popular masivo e importante, con reconocida y profunda originalidad a nivel continental. Y un movimiento en ascenso numérico y cualitativo.

Su persistencia a lo largo de cerca de 35 años y su continuo crecimiento geográfico y organizativo, le aseguran un pasado, una experiencia asimilada y unas tradiciones, un funcionamiento estructurado, lo mismo que un amplio prestigio entre las masas y un temeroso respeto de las instituciones estatales.

Sus lides se expanden más allá de la simple pugna por el suelo, la vivienda o los servicios públicos, alcanzando un alto nivel reivindicativo por el derecho al trabajo y a la ciudad en general.

Su amplitud y carácter de masas se concretizan en movilizaciones muy concurridas y combativas. Destacándose el apoyo permanente del frente barrial a las organizaciones del movimiento obrero y sindical, junto con su actuación resuelta y decisiva en las escaramuzas contra la oligarquía colombiana, como ocurre con su participación en los paros cívicos y sindicales, y en las marchas y manifestaciones de protesta que giran alrededor de la prestación de los servicios públicos, el alto costo de la vida o la supresión de las libertades democráticas.

La articulación y simbiosis del movimiento por la vivienda con el resto de las luchas populares, sindicales, económicas o políticas, lo convierten en un frente específico del movimiento revolucionario del proletariado.

2. Origen y desarrollo

La génesis y surgimiento de los combates por la vivienda no son artificiales, sino que brotan espontáneamente como respuesta solidaria de las masas urbanas a sus necesidades de tierra. Se manifiestan como una nueva modalidad de lucha contra el latifundio, esta vez urbano.

Se puede agregar que esta pelea urbana se enraiza en la tradición de las luchas agrarias contra el latifundio que data desde los años 20. Es un hecho notable que entre 1950 y 1965, en muchos casos se encuentren en las filas de la contienda urbana veteranos de las pugnas agrarias de los años 30, de la autodefensa campesina en 1949-52, militantes del movimiento agrario armado. Hombres y mujeres que con anterioridad experimentaron en otros escenarios las formas superiores de lucha social, durante la cual adquirieron una claridad política y una disciplina organizativa que les permitieron liderar las acciones urbanas de masas.

Desde este punto de vista, el movimiento de los destechados urbanos es la continuación de una larga tradición popular de lucha contra la oligarquía, en otro escenario y con otros modelos organizativos, tácticas y métodos.

Por otra parte, las contiendas por el techo se originan y se desenvuelven bajo la conjunción y desarrollo de varios fenómenos modernos:

El salto forzado y rápido de un país agrícola a una nación urbana y la crisis provocada por el despojo masivo y cruento de la población campesina, la cual, diezmada y asustada, se refugia en ciudades y poblados que no estaban ni preparados ni dispuestos a acogerla.

El éxodo rural ocasiona un veloz e intenso proceso de urbanización, el cual duplica entre 1938 y 1973 a la población urbana e invierte en 35 años la distribución campo-ciudad.

Las particularidades del desarrollo económico. En términos generales, el proceso de urbanización se da sin un proceso equivalente de desarrollo industrial. El período 1950-1973 se caracteriza por un débil crecimiento del sector secundario y un estancamiento relativo del empleo en la manufactura, mientras que el sector terciario aumenta vertiginosamente, con proliferación de oficios inestables, callejeros y mal remunerados.

Ello, junto con el auge de la producción agrícola orientada a la exportación mundial, conlleva al surgimiento de un numeroso proletariado rural nucleado en poblados menores y centros intermedios, y a un ejército de subempleados urbanos.

Los efectos de la expulsión campesina. El fenómeno migratorio, sumado al alto crecimiento vegetativo, impacta la casi totalidad del sistema urbano nacional, generando adecuaciones y transformaciones en la estructura espacial y económica de los centros afectados, que se densifican rápidamente y se expanden sobre vastas zonas periféricas. El empuje demográfico provoca una demanda inesperada y ascendente de trabajo, tierras y alojamiento, servicios públicos y sociales.

Estas demandas, al no ser satisfechas adecuadamente, ocasionan a su vez crecientes déficit habitacionales, paralelos a la carencia de empleos. Producen una continua disminución de la calidad de vida, agudizan la segregación socio-espacial y causan encarecimiento y escasez constante de tierras y viviendas.

Las especificidades y modalidades de las luchas generales y particulares del pueblo colombiano. Su cualificación y desenvolvimiento, ligados tanto al desarrollo de la clase obrera como a las coyunturas económicas y políticas, las acciones y represión estatal, y al grado de concientización de las masas urbanas.

La inadecuada intervención del Estado en la solución del problema de la vivienda de bajo costo, la planificación y reglamentación de la ciudad, lo mismo que en el control de la expansión urbana.

Desde mediados de la década de los años 50 es una constante en la política gubernamental habitacional y urbana reprimir las invasiones, impedir el crecimiento físico por medio de normas inoperantes, realizar programas de vivienda mínima basados en la autoconstrucción y el desarrollo progresivo —financiados con ayuda externa, con el fin de contrarrestar la construcción ilegal— e incentivar la construcción privada.

En ningún momento las instituciones estatales han enfrentado de manera eficaz las demandas de tierras y de vivienda planteadas por las masas de habitantes urbanos. La edificación clandestina se genera en la crisis del alojamiento, se nutre de los desaciertos y fracasos oficiales y se incrementa o disminuye de acuerdo con la cantidad y calidad de las soluciones estatales, de tal manera que cuando éstas se reducen, aumenta la autoconstrucción ilegal en sus dos modalidades principales: las lucrativas urbanizaciones piratas y las ocupaciones solidarias de hecho.

3. De los años 50 a los 70

Las luchas populares por el espacio urbano y la vivienda se concretizan en tomas u ocupaciones de terrenos, compras colectivas o “comuneras” de globos periféricos y movilizaciones por los servicios básicos y comunales.

Desde las primeras décadas del siglo se registran en Colombia acciones aisladas o espontáneas de los sectores sociales urbanos más deprimidos en búsqueda de un lugar para levantar sus habitaciones. Sin embargo, los movimientos masivos organizados por el techo, se originaron en la segunda mitad de la década de los años 40 en las principales ciudades del país, manifestándose en forma de operaciones de expropiación popular, señaladas como invasiones. Estas se incrementan y difunden geográficamente en proporción a la generalización de la crisis del alojamiento, involucrando un amplio abanico social que cubre desde las capas más desposeídas, que desempeñan oficios inestables y poco prestigiosos, hasta los estratos inferiores de la clase media.

El movimiento se desarrolló y generalizó a nivel nacional durante el decenio de los años 60, cuando se fortaleció la organización de los destechados, y sus luchas se ampliaron y cualificaron en el tiempo y en el espacio, articulándose a las luchas generales del pueblo colombiano.

Desde mediados de la década, el estrangulamiento de los ya insuficientes programas oficiales de vivienda, el empobrecimiento continuo del proletariado y de los sectores populares y el encarecimiento desmedido y progresivo de la vivienda y el suelo urbanos, actuaron como motor de las operaciones de expropiación popular, gestando al mismo tiempo otras modalidades o estrategias de combate tales como la acción jurídica, la denuncia parlamentaria, la compra comunera; las tomas de casas de inquilinato o de viviendas nuevas desocupadas y el enfrentamiento con los urbanizadores piratas.

En los últimos 20 años, las invasiones se multiplicaron como hongos, cubriendo vastos sectores en las urbes más importantes y afectando al mismo tiempo un sinnúmero de conglomerados de distinto tamaño y función regional.

Lideradas y canalizadas electoralmente por el partido liberal durante los años 50, las luchas por la vivienda constituyen desde los 60, bajo la hegemonía de la Central Nacional Provienda (CENAPROV), un amplio movimiento clasista independiente de los partidos políticos tradicionales y de las instituciones religiosas o asistenciales.

Orientadas desde entonces fundamentalmente por dirigentes populares y proletarios, responden a la ideología de la clase obrera y se integran al desarrollo específico de esta última y a sus luchas particula-

res. Así, la pugna por el suelo residencial se cualifica bajo la perspectiva política, y la toma de la tierra se convierte en un primer paso para organizar a nivel barrial la lucha por los servicios básicos y públicos y por los equipamientos vecinales, junto con las movilizaciones por el trabajo y la democracia. Los afiliados a GENAPROV, organizados en centros de inquilinos y de barrios, logran a veces elegir como concejales a líderes forjados en las contiendas por el techo.

En la década de los años 60, buscando canalizar o aprovechar con fines especulativos la gran demanda de vivienda popular, surgen numerosas organizaciones. Muchas utilizan nombres similares al de la prestigiosa Central Nacional Provivienda y engañan a los desprevenidos y urgidos destechados. También se manifiestan las de beneficencia o caridad, frecuentemente religiosas, que promueven algunos programas aislados y tratan de reemplazar la organización espontánea por la resignación y la religiosidad, opuesta a la combatividad que, desde luego, condenan. Sin embargo, algunos sacerdotes se suman realmente al frente de luchas por la vivienda. Los compra-votos del partido liberal crean algunas asociaciones de vivienda, proponen planes que nunca realizan, reciben auxilios oficiales y desaparecen una vez terminadas las elecciones.

Las acciones populares desatan una serie de medidas de control policiaco y jurídico, lo mismo que una violenta y creciente represión ejercida por el aparato punitivo estatal, la cual se hace más cruenta a medida que se amplía el movimiento y se restringe la democracia en el país, donde se libran verdaderas batallas militares para desalojar a los destechados.

No se puede olvidar la actuación decidida y destacada de las mujeres en las luchas por la vivienda. Ellas, agobiadas por la estrechez e incomodidad del inquilinato, asediadas a diario por los arrendadores y sufriendo en mayor grado la carencia o escasez de agua, energía, escuelas y demás servicios públicos y sociales, se suman definitivamente a la toma de la tierra y a la defensa de los asentamientos, lo mismo que a las acciones por la consecución de servicios básicos.

Asimismo, participan enérgicamente en manifestaciones y marchas contra el alto costo de la vida o el derecho al trabajo, juegan un papel importante en los paros cívicos y protestas populares y figuran también entre los mártires del movimiento, como Juana María García, de 65 años, asesinada en Cali en agosto de 1962, y Fidelia de Figueroa, muerta en Puerto Asís el 10 de diciembre de 1974.

4. El movimiento en los años 70

Durante la década de los años 70 las movilizaciones por la vivienda se extienden por todo el país, involucrando desde grandes capitales y polos nacionales o regionales, hasta pequeños poblados de trabajadores agrícolas. Se manifiestan en todos los centros donde la crisis del alojamiento y de los servicios públicos reviste caracteres muy agudos.

Las acciones se multiplican con el aumento de los déficit de empleo y vivienda. En las principales ciudades del país, el primero alcanza tasas que oscilan entre el 10, el 13 y el 19%; mientras que el déficit cuantitativo de viviendas urbanas, que era de 234 000 unidades en 1960, asciende en 1970 a 540 000; en 1975, a 819 500 y se calcula en un millón 300 000 en 1980.

Por su parte, el déficit cualitativo afecta amplias zonas residenciales urbanas, especialmente aquellas donde reside la población trabajadora y en las cuales proliferan el inquilinato y la vivienda compartida con sus características de hacinamiento, deterioro y promiscuidad. Crecen, además, el tugurio y otras formas inadecuadas de alojamiento, junto con la deficiente prestación de servicios públicos o su inexistencia.

Correlativamente con el incremento de la demanda, se da un aumento de las familias con bajos ingresos que no pueden resolver su necesidad de techo a través de la construcción legal, estatal o privada. Aumento originado en:

- La continua disminución del salario real y el empobrecimiento paulatino del proletariado, los sectores populares y las capas medias.
- La orientación, desde 1972, del sector de la construcción hacia la edificación masiva de tipo monopolista, dirigida a familias con altos recursos, fomentada por el Estado y afianzada en el sistema de valorización constante y en las entidades financieras privadas.
- El desplazamiento de los préstamos del BID y de la AID hacia la financiación de obras de infraestructura y de servicios públicos.
- La consiguiente disminución de los recursos del Instituto de Crédito Territorial (ICT) y del Banco Central Hipotecario (BCH), entidades estatales encargadas de la construcción y financiamiento de vivienda destinada a los sectores bajos y medios. Hecho que conllevó a la liquidación progresiva del ICT en favor de la empresa privada, lo cual produjo el estrangulamiento de los planes subsidiados, junto con la desviación del ICT hacia los estratos superiores de la clase media.

Por otra parte, la entidad estatal abandonó la construcción directa de sus programas, pasando a contratarlos con la empresa privada y los monopolios de la construcción.

Desde 1977, la entidad trata de adecuar las metas sociales a las formas disponibles de financiación de vivienda; busca su participación en los programas de desarrollo urbano, pero aún no ha logrado revivificarse.

La nueva política gubernamental acentuó el carácter comercial del alojamiento y excluyó definitivamente del mercado de vivienda normal a amplios sectores de la población.

El sistema de valorización constante, concretizado en las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), fortaleció el monopolio de la construcción imponiéndolo en las ciudades mayores e intermedias, e incidió notablemente en el alza desmedida de los precios del suelo, los materiales y los costos de construcción; ello hizo que se incrementaran los costos financieros y las utilidades y, lógicamente, el precio final de las viviendas, con lo cual se aleja día a día la posibilidad de solución al problema de la vivienda popular.

Además, convirtió los edificios en una magnífica inversión para el propietario, contribuyendo a elevar toda la gama de alquileres urbanos, e involucró a la “demanda no efectiva” a una gran parte de las familias de clase media.

Todo lo anterior se dio acompañado de una ofensiva jurídica que reforzaba los controles y favorecía la construcción comercial de las grandes firmas de arquitectos e ingenieros.

La vigilancia ejercida sobre las urbanizaciones pirata por medio de la aplicación de la Ley 66 de 1968, que trata de regular las actividades de la urbanización clandestina, constriñe la venta semi-legal de lotes sin servicios, modalidad que había resuelto el problema de tierras a una gran cantidad de familias.

Las condiciones descritas llevan a sumarse a las luchas por la vivienda a nuevos sectores sociales. No se trata ya única y exclusivamente de los inmigrantes de los años 50 y 60. Ya no participan sólo artesanos, obreros y subempleados, sino también empleados oficiales y privados, pertenecientes a los estratos inferiores de las capas medias. La gran mayoría de las familias que intervienen en las movilizaciones son oriundas de la ciudad o tienen una gran experiencia de vida urbana.

En este contexto, se reactiva la construcción ilegal y se amplían las acciones populares por la posesión del suelo, la casa y los servicios. Se desarrollan tácticas y experiencias nuevas, surgidas del mismo desenvolvimiento de la lucha.

Así, se refuerza la hegemonía de la clase trabajadora, tomando mayor peso aún la Central Nacional Provienda, la cual es objeto de una afiliación masiva y creciente, y encabeza, además, las luchas directas por el suelo, aquellas por la dotación y prestación de servicios públicos básicos y equipamientos sociales, lo mismo que las desarrolladas

contra la expulsión directa o indirecta ocasionada por obras de valorización, apertura de vías o programas de renovación urbana. Su actuación en defensa de las familias engañadas por los urbanizadores piratas es notable.

En la primera mitad de esa década se da, en todo el país, un auge de las ocupaciones de hecho, masivas y organizadas, realizadas en todo tipo de centros urbanos, las cuales se hacen cada vez más frecuentes, aguerridas y decididas.

La integración de numerosas familias con un cierto poder adquisitivo conduce a la compra colectiva o "comunera", con el fin de recuperar terrenos de engorde y construir barrios sin la intervención de los especuladores piratas y los intermediarios de la vivienda. Con esta nueva modalidad, las organizaciones populares pasan de la ocupación rápida, con posterior planificación de la construcción de los barrios, a la planificación previa antes de la ocupación. Involucran el diseño urbano y arquitectónico, el diseño de acueductos y alcantarillados, de edificios comunales.

Las necesidades de esta fase, el avance y cualificación de las luchas, llevan a algunos profesionales e intelectuales a ligarse consciente y decididamente al movimiento organizado por la vivienda. De modo que ingenieros, arquitectos y urbanistas contribuyen hoy al planteamiento y consolidación de los asentamientos. Se destaca también la creciente participación de escultores, grupos teatrales, pintores, intelectuales y conjuntos musicales.

Sin embargo, las reglamentaciones municipales y el alto costo del suelo dificultan la práctica de esta modalidad, y obligan a los compradores a ocupar ilegalmente las tierras que legalmente les pertenecen, y a defenderlas cuando interviene la fuerza pública para desalojarlos. Mientras tanto, las autoridades municipales confunden intencionalmente la compra colectiva con la invasión y aplican rigurosamente la Ley 66 de 1968 a las organizaciones o asociaciones populares.

Las experiencias y hechos de los últimos años demuestran que la Ley opera en favor de los monopolios y las grandes firmas constructoras de ingenieros y arquitectos que encontraban en la modalidad pirata un serio obstáculo para sus compras de tierras y necesitaban acabar con los pequeños especuladores improvisados y primitivos. Hoy, la venta de lotes a través de la urbanización pirata se ha tecnificado y perfeccionado, siendo realizada por grandes negociantes o terratenientes urbanos poderosos, con influencia y nexos políticos en las esferas sociales. Disfrazados bajo el nombre de falsas cooperativas o entidades sin ánimo de lucro y encubiertos por las mismas autoridades, logran vender millares de lotes.

Además se reincentiva, especialmente en la segunda mitad del pe-

río, la ocupación de tipo electoralista liderada por grupos del partido liberal, generalmente consentida por las autoridades municipales. Dichos grupos retoman la estrategia de la invasión simbólica desarrollada en los años 50, cuyos fines directos no van más allá de la negociación con los propietarios de las tierras o de la inclusión dentro de programas del Estado.

Indudablemente en estos años se acrecientan los desalojos feroces y cruentos con participación del ejército y la policía, la destrucción e incendio de ranchos, el número de heridos y muertos y las detenciones de dirigentes y ocupantes que llegan a incluir familias completas.

Fuera de los medios coercitivos indicados, los organismos estatales y los presuntos dueños de las tierras invadidas acuden a medios persuasivos: chantaje y oferta de soluciones de vivienda que no se cumplen, ofensiva ideológica a través de los medios masivos de comunicación para desprestigiar a los invasores, asustarlos o prevenirlos; a veces enfrentan a sectores sociales no antagónicos e igualmente explotados, y encargan a los vecinos que asedien a los invasores.

Los propietarios han utilizado cuadrillas de vigilantes armados y han montado juntas de acción comunal ficticias para sobreponerlas a la organización inicial de la comunidad. Los grupos políticos tradicionales actúan de la misma manera.

Hemos comprobado en múltiples casos, como aspecto benéfico de las ocupaciones populares, la desvalorización comercial producida en zonas residenciales vecinas. Objetivamente actúan como freno a la especulación: logran detener el aumento de los precios de las tierras y de los alquileres y los negocios de compra-venta de edificios. Eso explica en parte el hecho de que los más enérgicos opositores a una toma (y los que primero la delatan) sean muchas veces los vecinos del predio ocupado. Tampoco faltan casos en donde las quejas provienen de piratas especuladores o de antiguos invasores ya estabilizados y legalizados, quienes hostigan a los nuevos, argumentando descaradamente que “van a dañar la zona con tugurios o a desvalorizar el sector y sus propiedades”. Esto ocurre inclusive durante la instalación de las primeras viviendas en barrios originados en la compra colectiva o comunera.

Una de las tácticas más comunes entre las entidades municipales es prevenir las ocupaciones por medio de cordones verdes o planes de arborización y parcelación en los terrenos de posible acceso a las masas destechadas.

Indudablemente, la construcción de avenidas, puentes y edificios públicos, las obras de protección de quebradas y ríos, lo mismo que los programas de vivienda del ICT o del BCH, contribuyen también a los fines oficiales.

De memoria podemos citar, entre otros, al Cordón Verde de Medellín (1974-1976), el Plan de los Cerros de Bogotá (1973) y el de Cali (1976-1977), que comprendieron todas parcelaciones o granjas, planes de reforestación y vivienda de baja densidad destinada a los estratos con mayores ingresos. También la muy reciente constitución en Cali de una cooperativa conformada por familias de la clase media y alta, residentes en las colinas sur-occidentales, después de reiterados intentos de ocupación popular del sector. El objetivo, dicen, es proteger las colinas de la erosión por medio de la siembra de árboles; pero todo ello sirve, en realidad, para frenar las invasiones.

Como único caso en el país, en Medellín existe un inspector de tugurios, y en Barranquilla las autoridades venden bonos para erradicarlos. En Bogotá, una conocida institución estatal de salud ha ordenado a su jefe de personal no tener en cuenta las solicitudes de empleo presentadas por personas residentes en el Policarpa Salvatierra y otros barrios orientados por la Central Nacional Provivienda, tildándolos de comunistas y subversivos, con lo cual la persecución a los ocupantes de terrenos ociosos continúa 5, 10 y hasta 20 años después de la invasión.

Entre 1970 y 1975, la represión oficial logra reducir la "urbanización paralela", especialmente la de origen pirata. A partir de 1975 la prensa registra múltiples ocupaciones y desalojos continuos. A pesar de éstos, la gente necesitada de vivienda y expulsada regresa al sitio o busca otros terrenos con mayores posibilidades de éxito, logrando construirse de esta manera una considerable cantidad de barrios o núcleos en todo el país.

Los datos estadísticos existentes no permiten medir el fenómeno de la invasión actual a escala nacional; se cuenta tan sólo con algunos estudios locales (generalmente sobre Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla), y con la información de la prensa. Sin embargo, la oficial, censurada, calla muchas de las ocupaciones colectivas para dar cuenta únicamente de las expulsiones.

Los destechados ocupan terrenos en cualquier clase de ciudad o centro urbano, inclusive las poblaciones más apartadas y menores. Se registran múltiples tomas ya sea en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, grandes capitales o polos de concentración a nivel nacional; en Cúcuta, Palmira, Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Valledupar, Barranquermeja, etcétera, pertenecientes a la gama intermedia y cabeceras regionales; o en Sincelejo, Valparaíso (Antioquía), Arboletes, Puerto Asís, Granada, Pitalito, etcétera, de diversa importancia y magnitud demográfica.

Especialmente en Bogotá, entre las nuevas tácticas se desarrolla limitadamente la toma de casonas o casas de inquilinato centrales. Al afectar estas operaciones sectores urbanos deteriorados, pero con una

altísima renta potencial, han sido fuertemente reprimidas por la fuerza pública, que ha dejado hasta ahora como saldo el asesinato a golpes de un niño, numerosos contusos y detenidos y contados éxitos.

Correlativamente, con el aumento vertiginoso del costo de la vida, disminuye el poder adquisitivo del salario. Así, en 1982 el salario mínimo representaba sólo el 38% de la canasta familiar obrera, y cerca del 80% de la población económicamente activa ocupada percibía ingresos iguales o menores a él.

Aproximadamente el 60% del déficit cuantitativo de vivienda, correspondía a familias cuyo nivel de ingreso las dejaba fuera de las soluciones estatales y de la compra de lotes en urbanizaciones piratas.

De otro lado, numerosos establecimientos industriales, sobre todo pequeños, asfixiados por la política estatal, se ven obligados a cerrar o a disminuir el personal de planta. Las tasas de desempleo giran entonces alrededor del 10%, variando según las ciudades (Medellín 15.7, Cali 10.8, Pasto 10.2).

Estos factores agravaron el descontento general de las masas trabajadoras e impulsaron las movilizaciones populares. Entre 1978 y 1980 se produjeron múltiples intentos de tomas de tierras, muchos de ellos exitosos, en las ciudades metropolitanas, en centros intermedios y en aglomeraciones menores habitadas principalmente por el proletariado agrícola.

Ante la situación convertida en explosiva, como respuesta al empuje de las masas y como medio de control a las acciones populares organizadas por el techo, los estrategas del Estado plantean realizar soluciones mínimas de tipo tugarial, basadas en la adjudicación de lotes con servicios. Los programas oficiales se orientan en los lineamientos de las Conferencias de Vancouver y Habitat; dando gran importancia a la autoconstrucción, minimizan los costos mediante la adopción de normas mínimas de urbanización y adecuan las soluciones a la disminuida capacidad de compra de los futuros usuarios.

El Banco Central Hipotecario, con el fin de financiar la construcción de viviendas en segundos y terceros pisos en barrios obreros, concibió entre 1977 y 1978 el Plan Terrazas. Pero los trámites y exigencias para el crédito no han correspondido ni con los objetivos del Plan, ni con la realidad de los posibles beneficiarios, desviándolo hacia capas medias.

Hay que señalar como una constante desde 1970, la participación activa y beligerante del movimiento barrial en las reiteradas marchas, manifestaciones y protestas populares que giran en torno a la vivienda y los servicios complementarios. Las últimas, enmarcadas dentro de los paros cívicos o huelgas generales de toda una región, un conjunto de barrios o una ciudad, organizadas en torno a reivindicaciones co-

munes, han afectado fundamentalmente los centros pequeños y medianos. Éstos son los más desprovistos de servicios públicos y sociales, puesto que las inversiones en equipamientos y en obras de infraestructura se concentran en las metrópolis y grandes ciudades, es decir, allí donde el problema reviste caracteres más agudos y candentes.

Se destaca también la actuación de los sectores populares en los paros obreros generales de 1971, 1977 y 1979, que cobraron mayor fuerza en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, las áreas urbanas más industrializadas del país. Los lugares de máxima combatividad fueron precisamente los barrios periféricos más organizados.

También en esta década se observa un intento de penetración del movimiento de los destechados por parte de múltiples organizaciones, generalmente pequeño burguesas y con diversas orientaciones ideológicas. Algunas de origen confesional (jesuitas, grupo Golconda, etcétera). Otras pertenecen a diversas corrientes de izquierda que tratan de dirigir el movimiento popular, incrustándose artificialmente y conduciendo a menudo a los pobladores a la catástrofe o a la deserción.

Algunas organizaciones paralelas actúan con ayuda financiera proveniente de organismos extranjeros de asistencia. Pero todos estos grupos, sin excepción, tratan de copiar el modelo organizativo y las tácticas experimentadas por la Central Nacional Provienda.

Las pequeñas organizaciones de carácter gremial o vecinal establecidas por los mismos usuarios y cuyo fin único es adelantar planes de vivienda, tratan de realizarlos en medio de múltiples dificultades y trabas por parte de las entidades encargadas del control urbano. Aisladas, terminan casi siempre en el fracaso por falta de recursos económicos y organizativos.

Desde 1965 hasta 1970, la actividad constructora de las firmas privadas y la actividad estatal han ido ocupando los terrenos al alcance de las familias de menores recursos económicos. Una gran parte de ellos, antes despreciados por los capitalistas, se fueron integrando paulatinamente al mercado destinado a las clases media y alta, con lo que se frenó el asentamiento de barrios por expropiación popular. Otra, fue loteada y vendida por los urbanizadores piratas. Por su parte, el ICT llevó a cabo una política de adquisición de globos sub-urbanos la cual, además de elevar el grado de especulación en zonas agrícolas o periféricas fuera de los perímetros urbanos y contribuir notablemente a la expansión horizontal, fue acaparando poco a poco las tierras donde se podía dar la "urbanización paralela popular".

Estos elementos acentuaron la liquidación de las "Tierras del común", o sea los ejidos, en los que se producían tradicionalmente las invasiones. Asimismo, ahora se destinan los globos periféricos y sub-urbanos de menor precio a los planes estatales de lotes con servicios;

de esta manera, tierras agrícolas de baja calidad para la urbanización han pasado a ser consideradas como urbanas, con lo que se han elevado desproporcionadamente los precios por metro cuadrado y se ha originado mayor escasez para los sectores que quedan fuera de los programas.

De manera que los destechados tienen que buscar las tierras siempre más lejos. De hecho, en tales condiciones, descartan las compras colectivas como solución.

Hoy, frente a los planes estatales y su baja cobertura, frente al encarecimiento progresivo y desmedido de los precios del suelo disponible para la urbanización popular, frente al desempleo creciente y la continua reducción del salario real, la alternativa de solución, para los estratos bajos de la población, al problema de la tierra urbana, no puede ser otra sino la expropiación masiva y organizada de las tierras arrebatadas a sus ancestros.

A raíz de la preparación del Paro Cívico Nacional de 1977, se constituyeron en Bogotá numerosos comités cívicos, los cuales aglutinan hoy —alrededor de reivindicaciones comunes relativas al techo, los servicios públicos y los equipamientos— amplios sectores sociales y diversas organizaciones barriales dándose así un proceso de unificación de acciones que se propaga rápidamente a otras regiones y ciudades del país.

Por su parte, los pequeños grupos de pobladores o destechados se han ido involucrando en el movimiento organizado, pudiendo pensarse en la formación de confederaciones urbanas o regionales.

Desde su difusión en la década de los años 50, el movimiento clasista de los destechados ha sido objeto de persistentes embates, provenientes de sus diversos enemigos que buscan su debilitamiento y dispersión. A medida que el movimiento se amplía y fortalece, los ataques son más duros y continuos, pero no logran sus objetivos. Los luchadores por la vivienda en Colombia han resistido corajudamente a:

- El señalamiento y la fuerte represión, con acciones militares y policiales violentas, de los sucesivos gobiernos y autoridades locales.
- Los ataques de los terratenientes y urbanizadores piratas, que actúan directamente con provocaciones, amenazas y atentados contra los ocupantes y líderes, y desatan campañas para desprestigiarlos ante la opinión pública.
- El desencadenamiento de múltiples normas y reglamentaciones urbanas, de leyes específicas que contemplan sanciones económicas, procedimientos y acciones judiciales y castigos civiles, siempre más drásticos.
- Los múltiples intentos de penetración por parte de organizacio-

nes confesionales, pequeño burguesas o de grupos de los partidos tradicionales, muchos de los cuales actúan con ayuda financiera extranjera.

En las lides por la vivienda han muerto muchos hombres, mujeres y niños. El primero de sus mártires fue Julio Rincón, líder y concejal comunista asesinado alevosamente en Cali en 1951. Son incontables los detenidos y heridos durante los desalojos y también son numerosos los pobladores y líderes castigados en juicios civiles y en consejos verbales de guerra.

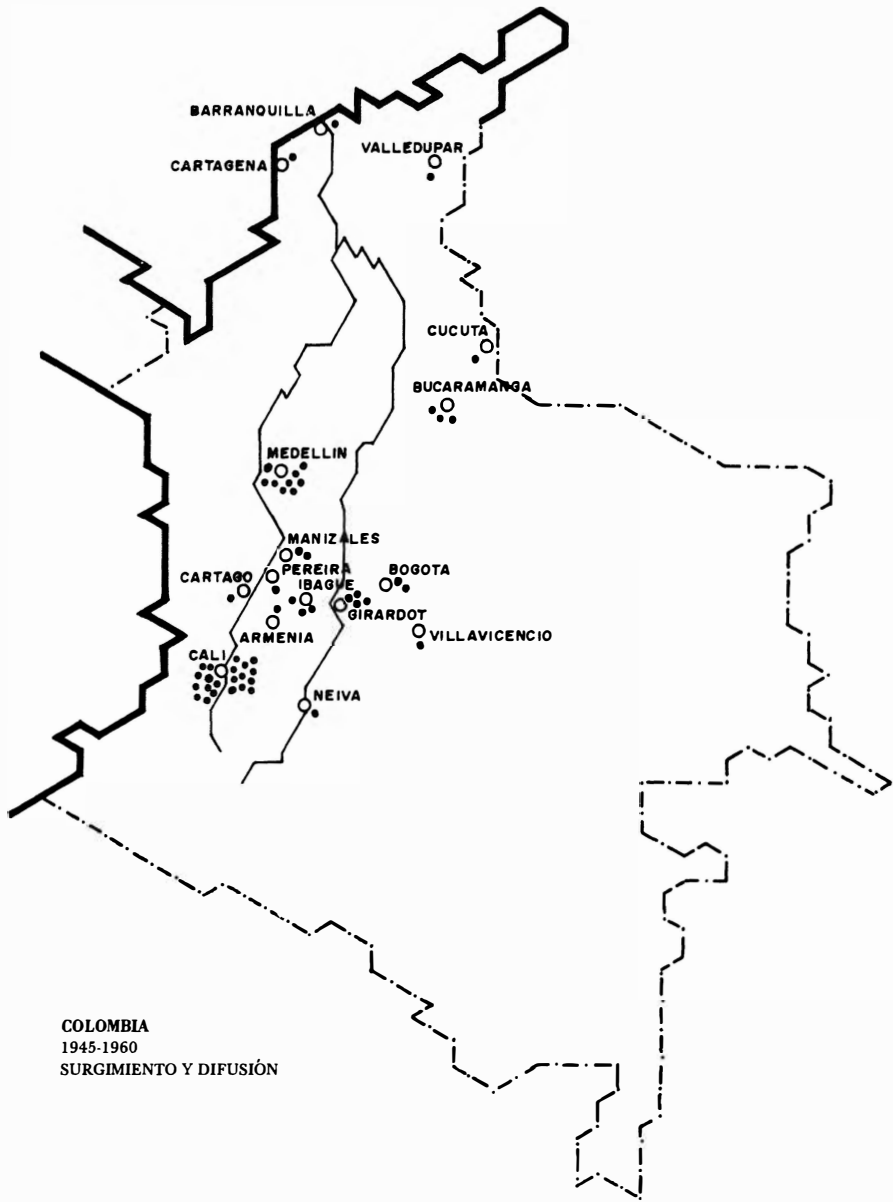
El gobierno de Turbay Ayala mantuvo en Colombia el estado de sitio, reforzándolo con la aplicación irrestricta de los artículos más represivos de la Constitución Nacional, y con la promulgación del levisivo Estatuto de Seguridad, en el cual se aumentan las penas a los líderes y participantes en tomas de tierras, considerándolas como un gravísimo delito, y se pretende destruir y acallar a las organizaciones populares y sindicales que conducen las luchas masivas por la vivienda y el trabajo; prohíbe manifestaciones y actos públicos, instaura el delito de opinión, los consejos verbales de guerra y el asesinato de dirigentes sindicales, políticos y barriales.

El movimiento de los destechados no ha escapado de la escala militarista de los últimos años. Los barrios más combativos y especialmente aquellos orientados por la Central Nacional Provivienda, debido a su tradición de lucha clasista, son constantemente amenazados y allanados. En varias oportunidades sus líderes más destacados han sido detenidos y hasta torturados.

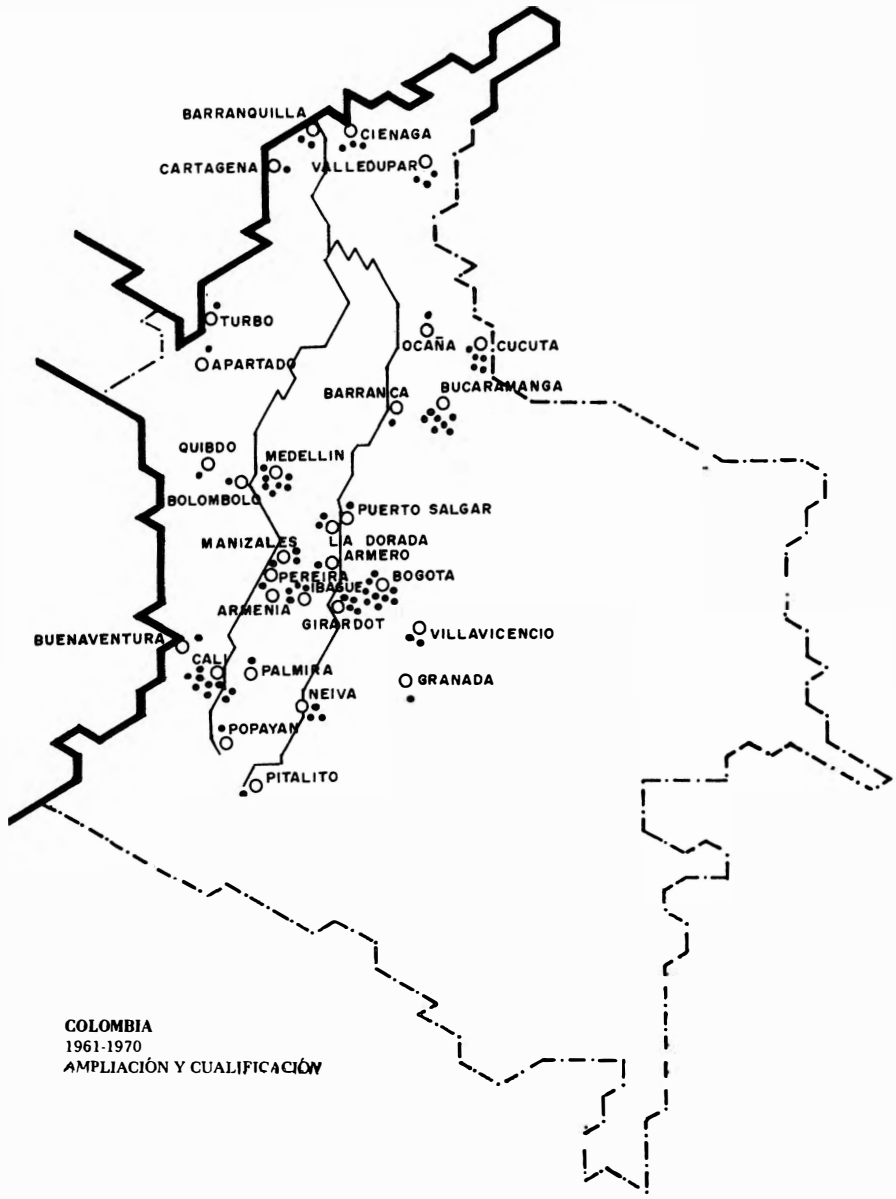
Sin embargo, las acciones represivas no logran detener la ofensiva popular por el derecho al suelo residencial y a la vivienda.

A pesar de los numerosos intentos de destrucción y de penetración, el frente de lucha por la vivienda es hoy, en Colombia, un movimiento urbano independiente, masivo y de cobertura geográfica nacional, que se manifiesta en todos los centros donde la crisis del alojamiento y los servicios públicos es aguda.

Articulado al desarrollo de la clase obrera, está en pleno ascenso, desenvolvimiento y cualificación. Apoyado tanto en la larga tradición de lucha contra el latifundio en el país, como en su práctica y experiencia propias durante más de 30 años, el movimiento organizado por el suelo y la vivienda modifica y perfecciona sus estrategias y modalidades de acción de acuerdo con las variaciones en la política estatal, el grado de represión que desata y el desarrollo de las luchas generales y particulares del proletariado y las masas urbanas.



COLOMBIA
1945-1960
SURGIMIENTO Y DIFUSIÓN



COLOMBIA
1961-1970
AMPLIACIÓN Y CUALIFICACIÓN



COLOMBIA
DESDE 1971
EXPANSIÓN A NIVEL NACIONAL

Bibliografía

Arango, Carlos: (1981), *Crónicas de la lucha por la vivienda en Colombia*, Bogotá, Editorial Colombia Nueva.

Campo, Urbano: (1977), *La urbanización en Colombia*, Bogotá, Ediciones Suramérica.

Mosquera, Gilma: (1982), "Luchas populares por el suelo urbano" en *Revista Estudios Marxistas*, núm. 22, Bogotá.

Villegas, Jorge: (1984), *El libro negro de la represión, 1958-1980*, Bogotá, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Otras fuentes:

Semanario del Partido Comunista: *La voz proletaria*.

Archivo personal de entrevistas.